

La madrugada del miércoles 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry, convertido en instrumento de la cúspide militar derechista, clausuró el Congreso, implantó una rígida censura de prensa, ordenó el arresto del senador frenteampulista Enrique Erro para que lo juzgaran tribunales militares por presunta vinculación con la guerrilla urbana, e inició una sistemática represión de las organizaciones de izquierda.

Tres días después, el Gobierno puso fuera de la ley a la poderosa Convención Nacional de Trabajadores (CNT), ordenó la detención de todos sus dirigentes en la clandestinidad y se apoderó de los fondos de la organización gremial, mientras los trabajadores mantenían al país paralizado y ocupaban las fábricas en repudio al golpe fascista, en una manifestación de combatividad que tal vez los militares no esperaban.

En un esfuerzo supremo por quebrar la huelga, el Gobierno dispuso la militarización de los trabajadores de la única refinería de petróleo en el país y virtualmente suspendió el derecho de huelga, al amenazar con despidos masivos y pérdidas de beneficios sociales a los trabajadores que persistieran en el paro.

El Uruguay liberal moría de un plumazo, aunque su agonía fue lenta.

Tampoco la emergencia de una minoría militar derechista en el Gobierno es fortuita. Hace años que Washington se interesa por la formación de una élite castrense identificada ideológicamente con Estados Unidos y llamada, como en este caso, a salvar al sistema, aunque sea transitoriamente de un golpe irreversible.

La democracia formal, zurdida, anémica, floja de carnes y de espíritu, tuvo en Uruguay una agonía de por lo menos un lustro.

A fines de 1967, tras la muerte del Presidente Oscar Gestido, asumió la primera magistratura Jorge Pacheco Areco, un político de segunda fila, tan lleno de complejos como autoritario, ultraconservador y, a la sazón, vicepresidente, un cargo cuasi decorativo.

Pacheco Areco cumplió las cuatro quintas partes de su mandato con medidas prontas de seguridad (estado de sitio atenuado).

Por último, puesto en jaque por los guerrilleros Tupamaros, llamó a

las Fuerzas Armadas, en las postrimerías de su Gobierno, para que se hicieran cargo de la represión, hasta entonces encomendada básicamente a la policía.

Imposibilitado por la Constitución para hacerse reelegir, Pacheco Areco designó a Bordaberry —su ministro de Ganadería y Agricultura, y próspero latifundista encandilado por el modelo brasileño— como candidato presidencial.

Bordaberry obtuvo menos votos que el senador Wilson Ferreira Al-

dió y obtuvo de la mayoría parlamentaria la aprobación del estado de guerra interno, que dio facultades omnímodas a las Fuerzas Armadas.

Dos días después, el 17 de abril, para escarmiento de las fuerzas legales de izquierda fueron masacrados siete obreros comunistas reunidos sin armas en un local del partido (Seccional 20, Paso de los Molinos).

Las Fuerzas Armadas, con la ayuda de «asesores» norteamericanos,

En la primera quincena de febrero de este año, los mandos castrenses desconocieron la autoridad de un ministro de Defensa nombrado por Bordaberry (el general R. Antonio Francese) y se sublevaron contra el Gobierno.

La Marina, en un comienzo fiel a su tradición legalista, se plegó finalmente, a los sublevados, en grado no desastimable, debido a la acción decidida del capitán de Navío Jorge Nader, condenado a muerte por los Tupamaros por el asesinato de los militantes del Frente Amplio, Ibero Fernández y Héctor Castagneto.

A pesar del despliegue de efectivos, la sublevación fue incruenta porque la oligarquía uruguaya entendió que debía compartir el poder con quienes tenían las armas. Una historia moderna del aprendizaje de brujo...

En los estratos medios de los sublevados había oficiales dispuestos —según versiones— a ir más allá en el plano de las reformas y el saneamiento de la Administración Pública.

Producto de esas posiciones encontradas y de la falta de coherencia y claridad políticas fueron los comunicados militares 4 y 7, impuestos a Bordaberry como virtual programa de gobierno, tras una dramática renlón en la base Boissolanza de la Fuerza Aérea.

Al parecer, un sector castrense entendía que había sido «brazo armado» de intereses espúreos y juraba no volver a serlo, en tanto abogaba por una lucha frontal contra la corrupción, así como por la puesta en marcha de algunas reformas —incluso un reordenamiento agrario— para salvar al país del atolladero.

La cúspide derechista, en cambio, coincidía sólo en la necesidad de ejercer el poder político, poner coto a la corrupción, mantener la represión contra todo el movimiento revolucionario y encauzar al país por las sendas positivistas del orden y progreso, que buenos dividendos parecía —según ellos— estar dándoles a sus colegas brasileños.

Esa concepción castrense no era, ni por asomo, un producto genuino uruguayo, sino, por el contrario, la correspondencia en el país a una situación ya desarrollada en varios puntos del continente, mediante sistemáticos esfuerzos de penetración y adoctrinamiento ideológico a través de cursos de «entrenamiento

## URUGUAY UN MOMENTO DECISIVO

ORLANDO CONTRERAS

donate, candidato del opositor Partido Nacional, pero gracias a un sistema electoral a propósito arcaico y a unas elecciones, sin duda fraudulentas, Bordaberry logró asumir la Presidencia el 1 de marzo del pasado año.

El nuevo Presidente, sin vocación política y conservador consecuente, no innovó lo hecho por su mentor. Las Fuerzas Armadas siguieron siendo el eje de las actividades represivas.

Bordaberry no cumplía aún dos meses en el poder cuando el 14 de abril los Tupamaros ejecutaron a cuatro integrantes del Escuadrón de la Muerte, entre ellos un viceministro y un oficial de la Marina.

La réplica represiva, al parecer, superó todos los cálculos. Ocho militares revolucionarios fueron asesinados a las pocas horas del atentado. Algunos, inermes, otros tras brutales torturas.

Al día siguiente, el ejecutivo pi-

lograron éxitos en la represión de la guerrilla durante el resto del año, hasta que a comienzos de 1973, el Gobierno estimó —erróneamente por cierto— liquidada la insurgencia y creyó conveniente el retorno de los militares a sus cuarteles.

Los militares no consideraron justo que los marginaran de las decisiones políticas tras haber salvado a un Gobierno de civiles «ineptos y corruptos». Varios dijeron haber entrado en contacto, durante la represión, con una realidad social que desconocían y sintieron brotar sus vocaciones conductoras.

Otros recordaron lo que sus profesores les enseñaron en Fort Gulick (Panamá) o en Fort Benning (Georgia, Estados Unidos) sobre el papel que los militares estaban llamados a jugar en el desarrollo y el afianzamiento de una democracia perdurable, con prescindencia de cuestiones formales, y rechazaron de plano una vuelta a los cuarteles.

para oficiales latinoamericanos» en Estados Unidos.

«Motivado por una creciente impaciencia ante la corrupción, la ineficiencia y el estancamiento del orden político, este nuevo militar se encuentra preparado para adaptar su tradición de autoritarismo a las metas situadas por el desarrollo social y económico», afirmaba Nelson Rockefeller en su informe «Quality of life in the Americas», recogido el 8 de diciembre de 1969 por el «Boletín del Departamento de Estado» de los Estados Unidos.

El periodista Carlos Banales Guimaraens, en un estudio sobre «Las Fuerzas Armadas en la crisis uruguaya», escrito hace cinco años, reconoce que el Ejército de su país, como los demás del continente, recibió una intensa radiación de demostraciones del peligro marxista y de prevenciones contra él, soportó la continua presión de los ejemplos del «american way of life» y fue constantemente inducido a participar, si no apoderarse, del Gobierno de su país para contrarrestar el peligro comunista y para acelerar el redimensionamiento RPT, redimensionamiento del Uruguay según los modelos norteamericanos.

Si eso era así hace un lustro, con la irrupción en escena de la Guerrilla Tupamaru y su jaque al régimen, la participación norteamericana en tareas ideológicas y técnicas dentro de las Fuerzas Armadas uruguayas se potencializó.

Estadísticas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que no incluyen «operaciones especiales», a cargo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), señalan que desde 1950 a 1970 fueron entrenados 1.723 oficiales y suboficiales uruguayos, tanto en territorio estadounidense como en bases extranjeras.

En realidad, el programa de «ayuda militar» cobró cuerpo en 1959, como una de las réplicas norteamericanas a la presencia «disonante» de Cuba en el hemisferio. Ese año se destinaron 4.700 millones de dólares al entrenamiento de militares latinoamericanos. En 1961, año del desastre norteamericano en Playa Girón (Cuba), la cifra subió a diez millones de dólares.

En 1963, según fuente estadounidense, la suma se elevó a diecinueve millones seiscientos mil dólares.

«Ningún otro aspecto del programa de ayuda militar produce intereses tan provechosos por los dólares gastados como estos programas de entrenamiento», se reconfortaba el «Comité presidencial para estudiar el programa norteamericano de ayuda militar» a Latinoamérica.

En la década 1961-1971, la asistencia policial norteamericana a Uruguay, incluyendo «asesores», personal entrenado y equipos, ascendió a 1.936 millones de dólares, de los cuales, 619 millones —poco menos de la mitad— correspondieron a 1971, cuando los Tupamaros tuvieron al Gobierno de Pacheco Areco al borde del colapso, según cifras de la US Agency for International Development.

Los entrenamientos de militares latinoamericanos —uruguayos incluidos— no se limitaron a las bases estadounidenses. También se brindó servicio a domicilio.

A partir de 1962, la Fuerza Aérea norteamericana envió grupos de comandos aereotransportados para entrenar a militares latinoamericanos, en sus propios países en tácticas de guerrillas y contraguerrillas. El Ejército estadounidense hizo lo mismo. (U.S. Training Latins to Fight Guerrillas, «New York Times», 17 junio de 1962, citado por Robert P. Case en «Entrenamiento de militares latinoamericanos en los Estados Unidos»).

¿Por qué ese empeño en adiestrar militares y facultarlos para tareas políticas conforme patrones y concepciones ideológicas norteamericanas?

La respuesta es por demás obvia. La explicación que dio el ex secretario de Defensa de los Estados Unidos Robert S. McNamara es más sofisticada, pero suficientemente explícita.

«Es posible que los beneficios mayores de nuestra inversión para la ayuda militar resulten del entrenamiento de oficiales elegidos o de especialistas en nuestros colegios militares y en los centros de entrenamiento de los Estados Unidos y el extranjero. Sus países nombran instructores a esos estudiantes cuando regresan. Son los futuros dirigentes de sus pueblos, los hombres que tienen conocimientos y los transmiten a sus propias fuerzas.

«No hace falta que insista en la utilidad de contar en las posiciones clave, con hombres que saben por experiencia cómo hacen las cosas los norteamericanos y cómo piensan. La amistad de esos hombres es inapreciable».

En Brasil, Uruguay, hasta hace poco en Argentina y en buena parte de los países del continente, esa amistad es «inapreciable» para Washington.

Pero esta fórmula pragmática también ha cosechado sonados reveses porque al igual que de colegios ultracatólicos han salido convencidos materialistas, de esas es-



El presidente Bordaberry.

cuelas han egresado oficiales que han participado en movimientos nacionalistas y populares profundos.

Banales, en su ensayo citado, sostiene con razón que el centro continental de poder (el imperialismo norteamericano) ha presentado la participación activa (de las Fuerzas Armadas) en las tareas de desarrollo como factor fundamental para una transformación pacífica y no demasiado profunda de las estructuras, que sirva para aliviar la presión de las masas desposeídas sobre ese centro continental de poder y sus réplicas locales (oligarquias) e impida un aluvión revolucionario violento capaz de desembocar en el establecimiento de un régimen marxista, o simplemente, contrario a los intereses del actual sistema.

Dentro de ese contexto y esa estrategia imperialista a nivel continental y mundial hay que situar la presencia castrense en el actual Gobierno uruguayo.

La CNT, lo mismo que los partidos de izquierda, prestaron «apoyo crítico» al tibio programa reformista de los militares durante la sublevación inculcanta de febrero, estimando, tal vez, que ése podría ser el punto de arranque para reformas más profundas.

El 31 de marzo último, la CNT informó que en entrevista de su ejecutivo con los mandos militares «se volvieron a constatar coincidencias en lo que respecta a los diecinueve puntos programáticos contenidos en los comunicados (militares) 4 y 7».

La CNT también descartaba la posibilidad de que los militares apoyaran un proyecto de reglamentación sindical responsabilizando a Bordaberry y a la oligarquía ganadero-financiera (La «Rosca») como promotores del proyecto.

El 9 de abril, sin embargo, la Junta de Comandantes precisó en documento público tener diferencias «irreconciliables» con la CNT y dio formal apoyo al proyecto de coacción sindical.

En el período de febrero a junio la renuncia de Bordaberry fue levantada como bandera de reivindicación popular, mientras que la contradicción oligarquica —pueblo y no civiles— militares, era planteada correctamente por el Frente Amplio.

La identificación (o la subordinación, para ser más preciso) de Bor-

daberry a los mandos militares saltó a la vista tras la sanción mancomunada de las principales medidas o proyectos de legislación represiva, como el de «consolidación de la paz» (mejor conocido como de «Estado peligroso») de clara factura fascista, lo mismo que el proyecto de «Reglamentación sindical» para quebrar la CNT, y el pedido de desafuero contra el senador del Frente Amplio, Enrique Erro.

Entre tanto, la tortura a presos políticos en los cuarteles se hacía rutina, mientras las reformas ofertadas en los comunicados 4 y 7 de febrero eran relegadas para mejores tiempos.

El 26 de junio, víspera de esta caricatura de golpe bonapartista, el diario «Ahora», vocero oficinista del Frente Amplio, afirmó que Bordaberry «está interesado en promover factores de discordia», mientras que los militares estarían «deseosos de un clima de concordia».

Horas después, en la madrugada del miércoles 27, los generales Esteban Christi, un conservador ultramontano, y Gregorio Alvarez, a quien se vinculaba con otra tendencia dentro de las Fuerzas Armadas, cerraban el Congreso, dando fiel cumplimiento a un decreto del Presidente Bordaberry. La línea de la discordia parecía triunfante.

La vida institucional de este país de 2.200.000 habitantes y menos de 200 kilómetros cuadrados de superficie, llegaba a su fin tras cuarenta años de actividad ininterrumpida.

Contradicciones demasiado profundas en una sociedad cuarteada por crisis estructurales hizo subir el tono de la lucha de clases a un nivel peligroso para la oligarquía y la metrópoli.

En tal situación, hasta las instituciones burguesas que no tuvieron la flexibilidad requerida en ese instante estorbaban.

La acción postrera del Congreso fue crear una comisión investigadora de las torturas que casi a diario se cometían en los cuarteles contra presos políticos.

Durante años el Frente Amplio —y los Tupamaros— denunciaron esos apremios ilegales, pero no fueron escuchados. Cuando los políticos tradicionales sintieron próxima la mano del verdugo, decidieron prestar oído a las denuncias. Fue demasiado tarde. El Congreso estorbaba.

Tardíos fueron también los intentos de la oligarquía y la cúpula militar castrense por encontrar una salida viable frente a la presión social. Ante una situación que parecía sin salida para ellos, optaron por

# La Capilla sIXtina

## EL OFICIAL LEBEL

La noticia llega confusa, como todas las noticias que últimamente llegan de la América del último Sur. Pero según parece, un oficial de la Marina fue condenado a arresto domiciliario por haber colocado en el balcón de su casa un cartel que decía: Abajo la Dictadura. El oficial respondió al arresto saliendo al balcón vestido con uniforme de gala y cantando el himno nacional. Los transeúntes no se quedaron atónitos, que es como se quedan los transeúntes cuando pasan cosas así. Los transeúntes simplemente se emocionaron.

No se sabe qué ha sido del oficial, urgentemente detenido, urgentemente trasladado a uno de los sótanos del poder urgente. Pero el gesto del oficial Lebel pasará a la historia anecdótica de la locura, en el apartado de los casos menos recuperables. Desde los balcones cercanos al del oficial contemplaban el espectáculo algunos almirantes brasileños, un puñado de generales bolivianos, agentes de paisano del Departamento de Estado, medio millón de policías de los cuatro continentes, cinco o seis millones de sicarios al servicio del no, de la nada, del nadie y sus respectivas esposas. Se criaban apuestas sobre la duración del desafío del oficial. Como en las óperas románticas, el oficial tenor mantenía el do de pecho como un túnel de aire incontestable, y el grito manchaba el continente entero como aceite de denuncia. Sobre el asfalto de Montevideo crecieron de pronto treinta mil flores del bien, y de los fusiles salieron cárdenas flores del mal. La dentadura rota del mundo sonreía, pese a las destrucciones.

Hay túneles secretos que unen Vietnam con Montevideo. Túneles que no sirven para huir. Que actúan como vasos comunicantes de los líquidos de la Historia. Los criados de gala servían licor de menta "on the rocks" en los balcones proscenio y los almirantes dejaban de vez en cuando la conversación para practicar sumergido esquí acuá-

tico con submarinos fuera borda. Cañones tubos de escape. Espadas como labios.

—¿Qué canta?

—El himno nacional.

—No es suyo. Es nuestro. Que se lo quiten.

El oficial Lebel respiraba de vez en cuando profundamente para asegurarse de que seguía vivo al frente del mundo. El oficial Lebel estaba en aquellos momentos al frente del mundo. Los muertos y los vivos por la libertad avanzaban tras su estela. La estatura de un hombre es a veces la estatura de los hombres.

—Se ha equivocado de estrofa —opinaba una generala.

En los abanicos, Versailles.

El general Amin ofrece su ayuda al Presidente Nixon para salir bien librado del "affaire" Watergate.

—No. Me parece que lo canta correctamente.

—No. Se ha equivocado en una estrofa.

Cada día hay más muertos sin sepultura, se escribía en las tesis fin de carrera de los años cuarenta, cincuenta.

—Que le hagan callar. Noporto el himno nacional en voz de tenor. No hay nada como un barítono.

—No necesito su ayuda, general. Del caso Watergate salgo tan blanco como entré. No podría decir usted lo mismo.

Las masas en las calles preparan el túnel por el que rescatarán al oficial Lebel.

—Deténganlo.

—¿En nombre del orden portugués del Universo?

—¿En nombre del orden clásico del Universo?

—¿Oficial Lebel?

—Presente.

—Queda usted detenido en nombre del orden griego del Universo. Le recuerdo que todo cuanto diga y no diga, haga y no haga, podrá ser utilizado en su contra.

Y el oficial Lebel le hizo un corte de mangas.

Lejano llegaba el orfeón uruguayo cantando: Tembld tiranos.

## URUGUAY

cancelar la vida institucional y desechar por anticuada toda una tradición liberal que fue orgullo de generaciones de orientales (uruguayos).

La crisis estructural del país, como su crisis político-social, también incide dentro de las coordenadas de la crisis mundial del imperialismo y sus formas de dominación local.

En las primeras décadas del siglo, Uruguay fue un país exportador de carne y lanas, con mercados más o menos seguros y una población reducida. El ingreso «per cápita» era alto, había una gran concentración urbana y los uruguayos disfrutaban de una legislación social avanzada.

Durante la segunda guerra mundial se desarrolló en el país una industrialización sustitutiva, ya que los productos que antes venían de Europa y Estados Unidos estaban destinados al frente de combate y no al consumo de la periferia neocolonial.

Concluida la guerra y con nuevos repartos de mercado por el imperialismo y los países industrializados bajo su órbita, las exportaciones del país decayeron, la lana tuvo competencia de los sintéticos y la industrialización, sin bases estructurales sólidas, virtualmente cesó.

Uruguay se convirtió poco a poco en una nación de funcionarios, jubilados, comerciantes e intelectuales subutilizados, junto a una clase obrera combativa pero no absolutamente decisiva como factor político por su peso específico en el conglomerado social. Las cifras de la parálisis son elocuentes: en 1971 todos los países de América Latina tuvieron algún grado de crecimiento en su producto bruto interno, salvo Uruguay, que descendió 0,6 por 100. En 1972 —siempre en base a estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)—, tampoco hubo crecimiento. El costo de la vida, en cambio, subió en 1972, según conservadoras cifras oficiales, un 99 por 100, y de diciembre a mayo del 73, el incremento fue del 33 por 100.

Los salarios reales promedio, aseguró el Instituto de Economía de la Universidad de la República, llegaron el año pasado al punto más bajo de las últimas dos décadas.

Tomando como base 100 el año 1961, el índice de los salarios reales en 1949, fue de 82,3 para el sector privado y sólo 78,9 en 1972. Para el sector público, fue un punto y fracción superior al de hace veinte años: 83,6.

La devaluación del dólar, por último, hace engañoso el aparente aumento del valor de las exportaciones para este año; gracias a una situación coyuntural, la tonelada de carne se cotiza sobre mil dólares,

pero, a su vez, las importaciones son más caras. Los términos del intercambio, por tanto, se hacen más desfavorables.

Ante esta situación, el Frente Amplio y el Partido Nacional dirigido por Ferrreira Aldunate, presentaron una plataforma común gubernamental previendo un colapso del actual Gobierno, hostigado por una huelga obrera de casi dos semanas.

El programa demanda «el cese» de Bordaberry, el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales y el fin de toda práctica «vejatoria de la persona humana».

También el restablecimiento de los derechos de los partidos políticos y las organizaciones gremiales, la recuperación del poder adquisitivo de sueldos, salarios y jubilaciones. El fin de la independencia externa, la eliminación de los grupos privilegiados y la puesta en marcha de un programa mínimo de transformaciones económicas y sociales.

Un «Gobierno provisional» sería encargado de llamar a consulta popular para crear una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, que elaboraría la nueva institucionalidad del país. Tras cumplir esos pasos, se llamaría a nuevas elecciones para la constitución del Gobierno definitivo.

La oligarquía, la cúspide militar derechista y el imperialismo parecen inclinarse por una solución de fuerza al estilo brasileño, sin reparar en que la estructura y la historia del Uruguay hacen muy difícil reeditar el modelo traumático del vecino. Entre estas posiciones polarizadas, los observadores no descartan varias soluciones intermedias. La cúspide militar derechista podría, llegado el caso, sacrificar a Bordaberry si con ello logra quitar presión al conflicto. Otra variante en los antipodas de ésta, señala la posibilidad de la caída de algún personaje «ultra», tal vez el jefe del Ejército, general Hugo Chiappe Posee, para dar paso a una figura no tan vinculada con la represión y con el ex Presidente Jorge Pacheco Areco. Mientras en cuarteles y en la Embajada norteamericana en Montevideo —una verdadera fortaleza sobre el Río de la Plata— se articulan éstas y otras variantes, los trabajadores seguían en las calles y fábricas su lucha firme contra el golpe.

Los militares mataron a un joven profesor universitario y comunista —Ramón Roberto Pérez— y a un estudiante socialista de dieciséis años —Walter Medina—, pero la huelga, al escribir estas líneas, entraba en su día catorce con redoblado ímpetu combativo.

Los manuales de Fort Gulick y Fort Benning no cuentan generalmente con esos factores subjetivos en sus diagramas de operaciones. ■ O. C. (Prensa Latina).

SIXTO CAMARA